

Editorial

¿Continúa siendo democrática la transición?

Se da por sentado que El Salvador transita hacia una democracia por un camino seguro y estable. Sin embargo, los últimos acontecimientos de la vida nacional cuestionan seriamente este presupuesto. Un análisis riguroso de los mismos muestra la existencia de fuertes tendencias contrarias, las cuales estarían llevando hacia un Estado cuyo poder sea ejercido autoritariamente. La dinámica que concentra la riqueza cada vez más y la intolerancia ante la oposición política real se han convertido en grandes obstáculos para la democratización de la sociedad y del ejercicio del poder del Estado.

Esta tendencia hacia el autoritarismo es contraria al espíritu y la letra de los acuerdos de paz y mostraría, por lo tanto, que el proceso puede ser revertido. Algunos enfatizan interesadamente que los acuerdos de paz se encuentran políticamente agotados y, por consiguiente, habría que olvidarse de ellos, desconociendo con ello que sus incumplimientos y los cumplimientos a medias hacen de ellos el único pacto social con suficiente legitimidad para seguir guiando la transición de la postguerra.

Es evidente, entonces, que El Salvador necesita que el proceso sea retomado ahí donde lo dejan formalmente los acuerdos de paz, sabiendo que buena parte de la tarea está prácticamente por hacer. Curiosamente, fuerzas sociales y políticas que en el pasado reciente se enfrentaron, ahora parecen estar dispuestas a dialogar para encontrar puntos comunes ante la arremetida neoliberal del gobierno de ARENA.

El llamado pacto de San Andrés no es el instrumento idóneo para retomar el proceso, por la forma antidemocrática como se concertó y por sus contradicciones internas. Más aún, al ser una imposición políti-

Un análisis riguroso... muestra la existencia de fuertes tendencias contrarias, las cuales estarían llevando hacia un Estado cuyo poder sea ejercido autoritariamente.

ca, contradice sus pretendidos objetivos democráticos. El Salvador debe reflexionar sobre estas tendencias que lo empujan hacia el autoritarismo para no dejarse sorprender por políticos inescrupulosos y para exigir, con fuerza renovada, la historización del espíritu de los acuerdos de paz.

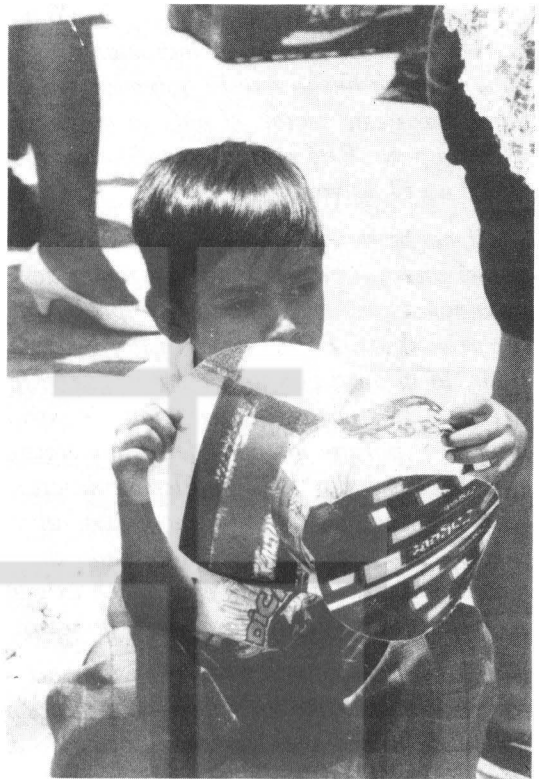
1. Tendencias autoritarias

Muy pocos dudan que el gobierno actual ha completado su primer año muy desgastado y deslegitimado por los escándalos de corrupción e ineficiencia administrativa, por la ambigüedad, la precipitación, la improvisación y la contradicción en la gestión pública, por la elevada conflictividad socio-laboral, por la violencia criminal, por el auge del crimen organizado y la persistencia de los escuadrones de la muerte. Todo esto se tradujo en una conducción política mala, en inestabilidad social y en pérdida de confianza de la población en la institucionalidad estatal. La desaprobación de la opinión pública se encuentra expresada en el 4.96, en una escala de uno a diez, que aquélla le otorgó al presidente Calderón en su primer año de gobierno y en el descenso notable de las preferencias por ARENA —el 14.3 contra el 12.2 por ciento a favor del FMLN (ver el artículo del Instituto Universitario de Opinión Pública en esta edición).

El gobierno de Calderón considera la existencia de una oposición real en la asamblea legislativa y en el ámbito social como un obstáculo grave que le impide gobernar y que, además, lo desgasta políticamente con sus propuestas y denuncias. Esa oposición es la que no le permitió contar con una Corte Suprema de Justicia a su medida, la que le impidió nombrar un Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos condescendiente con él y la que llevó a un impasse la aprobación del incremento del impuesto al valor agregado en un 40 por ciento. Ni ARENA ni los partidos tradicionales estaban acostumbrados a esta clase de oposición que, por otro lado, es típicamente democrática.

Las elecciones le dieron la presidencia a ARENA, pero no la mayoría en la asamblea legislativa. Por lo tanto, para poder gobernar, de acuerdo a ese mandato popular, el gobierno y la fracción legislativa de ARENA deben negociar continuamente con la oposición política, en lo que debiera ser un ejercicio democrático continuo. Pero la costumbre inveterada ha establecido que el partido político que detenta el poder ejecutivo debe contar también con la asamblea legislativa e incluso con la Corte Suprema de Justicia.

En realidad, la política salvadoreña todavía no supera el presidencialismo sin controles ni equilibrios y, por consiguiente, tampoco acepta a la oposición política como un factor real de poder con el cual hay que contar. Por eso, cuando los aliados tradicionales de ARENA —el antiguo partido oficial y los demócrata cristianos— fallaron al negarle sus votos para aprobar el aumento del impuesto al valor agregado, dejando entrampado al gobierno, éste y su facción legislativa buscaron restablecer la mayoría en la asamblea legislativa, lo cual implicaba un aliado cualquiera, in-



cluidos Joaquín Villalobos y el partido que está organizando. Así, lo que uno interpreta como una necesidad para gobernar y la desmedida ambición política del otro hicieron posible la unión de dos enemigos hasta hace muy poco irreconciliables.

Así nació el llamado pacto de San Andrés, firmado por los partidos ARENA y Demócrata, el cual ha querido ser presentado como un pacto de nación, pero en realidad solamente es un pacto de gobierno, no sólo porque fue suscrito por el partido en el poder y por otro que ni siquiera está organizado y reconocido legalmente, sino también por su contenido. El pacto acepta el modelo neoliberal tal como está siendo implementado por los gobiernos de ARENA. El planteamiento económico recoge todas las propuestas del Ministro de Hacienda actual, excepto la dolarización de la economía nacional. Por lo tanto, en el campo económico no hay ninguna novedad, excepto que confirma la profundización de la política actual al incluir las propuestas de dicho ministro.

El reducido sector de la empresa privada que ha reconvertido sus actividades y diversificado sus inversiones, enfatizando las de carácter transnacional, estaría descontento, en general, por la mala conducción gubernamental del presidente Calderón y, en particular, por la lentitud con la cual ha avanzado la política económica en el primer año de su

gestión. Para este sector, el crecimiento hacia el exterior es una necesidad urgente. El acelerado incremento de su poder económico y de sus ganancias ha hecho que El Salvador se le haya vuelto estrecho. En realidad, para este sector, el país ya no es una nación, sino el lugar desde el cual opera. Está más interesado en el mercado internacional que en el futuro de El Salvador.

El pacto también incluye una serie de reformas sociales y políticas que si bien forma parte de la agenda de la izquierda, para la derecha tradicional de ARENA todavía representa una amenaza a su poder y a sus privilegios. Para esta derecha, las reformas propuestas y, en particular, la alianza con un ex grupo guerrillero responsable del secuestro y, en algunos casos, del asesinato de varios de sus miembros, son inaceptables, porque las considera "comunistas". Pero estas reformas son parte indisoluble de la política neoliberal. Los planificadores nacionales e internacionales —el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional— parecen haber comprendido que la estabilidad, y también la rentabilidad, del proyecto económico exigen reformar el Estado y aliviar los efectos más devastadores de la pobreza.

Ahora bien, estas reformas tampoco representan novedad alguna —en cualquier caso, lo nuevo vendría dado porque de una mera declaración de intenciones se estaría pasando a una política gubernamental sobre la cual se pueden pedir cuentas—, puesto que todas ellas están comprendidas en las obligaciones que la Constitución atribuye al presidente de la república y en los discursos más importantes de Calderón —del 1 de junio de 1994, del 28 de marzo de 1995 y del 1 de junio de 1995—, lo cual arroja serias dudas sobre su voluntad política respecto a ellas. Si en su primer año, el gobierno actual no ha hecho avances en lo que supuestamente es su propio plan, qué garantiza que lo hará a partir de ahora. En cualquier caso, para llevar a cabo estas reformas no era necesario firmar un pacto.

La ausencia de novedad económico social reduce el pacto de San Andrés a su justa dimensión: se trata de un pacto de gobierno por el cual ARENA reafirma su política gubernamental y el Partido Demócrata la asume como propia. En consecuencia, los votos de ambos partidos en la asamblea legislativa se ponen al servicio de dicha política. Por eso, quienes quieran participar tendrán que aceptar tanto la política económica como las reformas sociopolíticas que la acompañan. De ahí que el margen para maniobrar o proponer se encuentra muy limitado de antemano.

Ante la falta de innovaciones económico sociales, el pacto se reduce, a las inmediatas, a la constitución de una nueva mayoría legislativa por parte de dos partidos políticos —el oficial y uno que aún carece de

estatuto legal y de representación popular significativa. Sin embargo, esa mayoría es muy útil para el gobierno, puesto que le facilitará la aprobación legislativa de las medidas que se deriven de su política. Para la dirigencia de los demócratas se trata de una oportunidad quizás única para colocarse en el centro del espectro político salvadoreño, convirtiéndose así, según sus cálculos, en una alternativa real de poder a mediano plazo. A corto plazo, su participación en el llamado grupo de seguimiento del pacto, le proporcionaría una cuota de poder importante para influir en la dirección e implementación de la política gubernamental.

De esta forma, el nuevo partido espera ganar credibilidad no ante la izquierda o ante el pueblo, los cuales ya no le interesan, sino ante los sectores medios. En este sentido, a la dirigencia demócrata le ha venido muy bien carecer de base popular en la actualidad, porque de lo contrario, ésta no le hubiese permitido firmar un texto como el de San Andrés. Ahora bien, los demócratas piensan reconstituir su base social con los sectores medios y los empresarios que surjan a raíz de la actividad de sus bancos comunales y de otros proyectos de desarrollo local y regional, financiados por agencias internacionales o por el gobierno mismo. El propósito de esos proyectos no es tanto el desarrollo local y el fortalecimiento comunitario como la captación de votos.

A mediano plazo, ARENA y el Partido Demócrata cuentan con que mantendrán esta mayoría en la asamblea legislativa en 1997. Los programas sociales y los proyectos de desarrollo serán puestos al servicio de esta meta, como instrumentos para captar votos. Si esos programas y proyectos alcanzan medianamente sus metas, probablemente conseguirán su objetivo, dada la precariedad de las condiciones de vida de la población, su bajo nivel educativo y su poca conciencia política. ARENA tiene a su disposición las instituciones gubernamentales y los fondos prácticamente ilimitados del capital que lo apoya, mientras que los demócratas cuentan con sus propias fuentes abundantes y seguras de financiamiento, con organizaciones no gubernamentales y, si fuese necesario, con la ayuda del mismo gobierno y del partido oficial.

Este plan pretende reducir a la oposición a su mínima expresión, ya sea cooptándola o restringiendo drásticamente sus posibilidades reales. Más concretamente, lo que se pretende es impedir que el FMLN pueda convertirse en un partido opositor grande y fuerte que, por un lado, pueda llegar a poner en peligro el predominio de ARENA y, por el otro, obstaculice las aspiraciones políticas del Partido Demócrata y las ambiciones personales de sus dirigentes. Por eso, en realidad, a ninguno de los dos le interesaba que el FMLN participara en conversaciones que pudieran llevar a un consenso político, no obstante haber presentado

propuestas interesantes y coherentes sobre la reforma tributaria. Los intereses del poder dominante están mejor servidos si el FMLN es presentado como una "extrema recalcitrante" que se niega a reconocer y participar de los beneficios de la democracia.

La realidad es muy otra. El FMLN y los otros partidos representados en la asamblea casi obligan a ARENA a sentarse a negociar la superación del impasse, en el cual había caído el gobierno a raíz del incremento del impuesto al valor agregado. Teóricamente, en esa mesa se habría podido negociar un replanteamiento de la política económica y social del gobierno desde una perspectiva más equitativa. Pero eso hubiera significado un triunfo político muy sonado para el partido más importante de la oposición. La oferta de la dirigencia demócrata es políticamente menos costosa y, además, no implica modificar las políticas gubernamentales fundamentales y, de paso, aisla al adversario de ambos.

Otro grupo que también quedaría aislado es la extrema derecha tradicional de ARENA, el cual todavía se niega a comprender que, por la simple reproducción del orden establecido, es necesario introducir reformas sociales y políticas de cierta envergadura. Este grupo continúa pensando que los esquemas y métodos de antaño siguen siendo válidos. En consecuencia, considera que el pacto de Calderón Sol con Villalobos es una traición a los principios básicos de ARENA. Este descontento está relacionado con el florecimiento reciente de los pequeños partidos de extrema derecha.

Así, pues, las reglas para acceder legítimamente al poder del Estado ya habrían sido establecidas por quienes lo detentan en la actualidad. Quienes acepten participar, encontrarán facilidades para conservar su cuota de poder actual, pero quienes se coloquen en la oposición o al margen, enfrentarán dificultades. De ahí la importancia de las medidas anunciadas para controlar a las organizaciones no gubernamentales, las cuales están dedicadas directamente a entorpecer las actividades de aquellas que pertenecen al FMLN o simpatizan con él. Estas medidas también están dirigidas contra las organizaciones no gubernamentales independientes, incluidas las de las iglesias.

Por consiguiente, las organizaciones sociales se encuentran en disputa. Aunque en la actualidad, ninguna de las dos partes está preparada

Entre estas tareas se encuentra la revisión del modelo económico social, que los negociadores de los acuerdos postergaron para cuando los espacios políticos indispensables estuviesen abiertos.

para hegemonizarlas, el FMLN se encuentra en franca desventaja, a causa de sus reacomodos internos que le resta fuerza y porque carece de los recursos de sus adversarios. La disputa será encarnizada, porque el gobierno y los demócratas están ofreciendo una dirección a unas fuerzas sociales a la deriva, debido a su confusión y dispersión. La oferta es atractiva, porque se cuida de ofrecer alguna ventaja a los diferentes sectores, grupos y organizaciones populares, siempre y cuando éstos acepten los presupuestos básicos del esquema. Es probable que las organizaciones populares de mayor peso no caigan en esta trampa, aun cuando la oferta sea tentadora para las dirigencias corruptas. La confusión prevaleciente en las fuerzas sociales no las ha privado de su buen olfato. Al contrario, si de algo pecan es de excesiva aprehensión y de una desconfianza histórica bien justificada.

El pacto de gobierno parece haber superado los obstáculos políticos inmediatos de Calderón y ARENA y satisface las ambiciones de la dirigencia social demócrata, pero al mismo tiempo atenta contra el futuro democrático de la transición. Al buscar expresamente, en nombre de una estabilidad mal entendida, anular a la oposición, abre la puerta al autoritarismo, lo cual, naturalmente, es ocultado. Al anunciar la existencia del pacto, el presidente Calderón dijo descaradamente que se trataba de un pacto nacional presentado por los partidos políticos, cuando, en realidad, no era más que un pacto de gobierno con uno de ellos. Al justificar su necesidad, se afirma que proporcionará estabilidad, pero a costa de suprimir la oposición política y social. Se habla de democratizar, pero favoreciendo la concentración de la riqueza y repartiendo el



poder político exclusivamente entre dos partidos.

Esto es más grave aún, si consideramos que, en relación a la reforma del sistema electoral, el pacto de San Andrés sólo acepta la elaboración de un nuevo registro de personas, dejando de lado otros aspectos claves para garantizar la limpieza electoral, en concreto, el carácter único de dicho registro, el voto domiciliario y la despolitización partidista del Tribunal Supremo Electoral —aspectos que no han pasado desapercibidos para la comunidad internacional que exige introducir estas reformas— y que, además, se propone incrementar el número de efectivos de la Policía Nacional Civil, pasando de los 7 mil actuales a 20 mil en 1996. Dado que es prácticamente imposible formar 13 mil nuevos policías en tan corto período, cumplir con este compromiso, significará introducir policías mal formados en una institución que todavía no ha podido superar los problemas ocasionados por la formación policial deficiente de sus miembros actuales. La cantidad de policías no es lo único que hay que cuidar para garantizar la seguridad pública, a no ser que se esté pensando en un Estado policial para confrontar la creciente conflictividad social.

El pacto de gobierno entre los partidos ARENA y Demócrata no puede compararse con los acuerdos de paz. El único denominador común es que ambos acuerdos surgieron de una negociación entre cúpulas y, aun así, la diferencia es notable, puesto que esas cúpulas se esforzaron por conseguir el respaldo necesario de sus respectivas bases (militares, empresariales, sindicales, políticas, etc.); la dirigencia demócrata no tiene la representatividad del antiguo ejército guerrillero; tampoco cuenta con una fuerza sociopolítica equiparable a la de su contraparte, por lo tanto, tiene muy poco margen para exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Ninguna de las partes puede acudir a la comunidad internacional, puesto que ésta no garantiza ni verifica lo pactado. Por otro lado, ni los partidos políticos ni la opinión pública le reconocen mayor legitimidad. Por lo tanto, comparar el pacto de San Andrés con los acuerdos de paz es un engaño más para buscar credibilidad.

La dirigencia demócrata, por su parte, se ha presentado como la única oposición constructiva y propositiva, aprovechándose deshonestamente de las propuestas presentadas con anterioridad por otros partidos políticos y ocultando su procedencia original. Todo ello forma parte de su denodado esfuerzo para limpiar su imagen, relegando al olvido su pasado guerrillero y terrorista, en particular el de Joaquín Villalobos, pero la prensa y la opinión pública se han encargado de asociar a su nombre la responsabilidad por el asesinato de Roque Dalton.

Los partidos ARENA y Demócrata se han unido para imponer al país un plan de gobierno, claramente autoritario en cuanto pretende acabar

con la diversidad de intereses y opiniones, y, por lo tanto, con el derecho a disentir. De ahí que planteen a los otros partidos políticos incorporarse al esquema establecido o correr el riesgo del aislamiento; por la misma razón, el movimiento social se concibe únicamente como una masa manipulable para generar votos. Aquí no hay cabida para la alternativa real ni para la discusión abierta y amplia, sino para lo que falsamente han dado en llamar el consenso, es decir, la imposición autoritaria de la opinión de un grupo o sector.

Paradójicamente, la mayoría resulta insatisfactoria para ARENA, aunque ésta pueda ser suficiente para conseguir efectos legales. El autoritarismo de ARENA ansía que su imposición sea asumida como propia por el conjunto de fuerzas políticas y sociales y, en consecuencia, aceptada plenamente. De manera equívoca, se ha dado en llamar consenso a esta pretensión, quizás porque ARENA teme que en cuanto la falta de unanimidad implica cuestionamiento y desacuerdo, pueda llegar a convertirse en una oposición que se transforme en alternativa. Pero eso es, justamente, lo democrático.

2. ¿Cómo avanzar en la democratización?

Ante estas pretensiones autoritarias y excluyentes, cabe preguntarse qué le pasaría a El Salvador si éstas tienen éxito. En la medida en que se profundice la política económica actual, habrá una mayor presencia del capital transnacional, más concentración de la riqueza y, en consecuencia, más empobrecimiento; si los programas sociales llegan a funcionar satisfactoriamente, se aliviarán los efectos más destructivos de la pobreza, pero ésta no será erradicada; si la reforma política se lleva a cabo, se modernizará el funcionamiento del Estado, pero surgirá un autoritarismo que no permitirá una oposición real, es decir, habrán partidos políticos y elecciones, pero aquéllos no podrán desempeñar su papel debido a su debilidad ni tendrán posibilidad real para acceder al poder; el movimiento social puede resultar fortalecido momentáneamente, pero se intentará cooptarlo. Por lo tanto, nada bueno puede esperar el país del llamado pacto de San Andrés.

Ahora bien, el futuro de este pacto de gobierno no está garantizado. Adolece de la misma fragilidad de un gobierno de corte autoritario que, como no tolera la oposición, necesita de un aliado. Por consiguiente, su consolidación depende de si ARENA recompone o no sus alianzas tradicionales con el antiguo partido oficial y con los demócrata cristianos y, en último término, de los resultados electorales de 1997. Es muy difícil que ARENA siga interesado en una alianza como ésta si llegase a obtener la mayoría en la asamblea legislativa. Por otro lado, la contraparte no tiene más poder que los votos que pueda retener en la asamblea

legislativa. Y aún así, este poder es muy relativo, pues su debilidad para reclamar o exigir ha sido puesta en evidencia en las votaciones legislativas.

Para avanzar en la democratización al menos se deben dar los cinco pasos siguientes : (a) recuperar el espíritu de los acuerdos de paz; (b) redefinir el modelo económico social; (c) consolidar la oposición; (d) establecer con claridad el papel de las fuerzas sociales y (e) exigir al Estado cumplir con sus responsabilidades.

(a) *Recuperar el espíritu de los acuerdos de paz.* Para que la transición continúe siendo democrática es necesario asumir el espíritu de los acuerdos de paz. Ese espíritu debe empujar la conclusión de las tareas pendientes y el inicio de aquellas otras que sean necesarias para construir una sociedad, en la cual se pueda vivir con mayor verdad, justicia y solidaridad. Entre estas tareas se encuentra la revisión del modelo económico social, que los negociadores de los acuerdos postergaron para cuando los espacios políticos indispensables estuviesen abiertos. Dado que esos espacios ya existen, ahora se impone proceder a dicha revisión. Esto implica poner en tela de juicio la política neoliberal que el gobierno anterior desarrolló al margen de los acuerdos de paz.

Aparte de considerar los lineamientos dictados por los organismos financieros internacionales y las modas, esa política debe ser reconsiderada a partir de sus resultados. La fidelidad a los acuerdos de paz y el compromiso por la vida impiden aceptar como un hecho consumado e incuestionable una política decidida y aplicada al margen de la transición de postguerra. Mucho menos cuando esa política es contraria a la democratización de la sociedad. Este esfuerzo nacional debe estar guiado por la preocupación por hacer coincidir la política económica con la democratización. Se trata de unificar lo que hasta ahora se ha mantenido separadamente, llegando incluso al extremo de la contradicción.

(b) *Redefinir el modelo económico social.* Presupuesto importante de esta discusión es hacer caso omiso de la tesis que sostiene que la política económica no es asunto de los "profanos", puesto que su naturaleza, eminentemente técnica, la hace coto reservado para los expertos. Esta tesis que, en realidad, es cuestionable, quiere evitar la participación de la sociedad en la formulación de la política económica. Indudablemente, la opinión de los expertos es muy valiosa, pero no debe ser la única, pues ahí se arriesga la vida y la muerte de la mayoría de la población salvadoreña. Es absurdo seguir pidiendo actos de fe en los análisis de los tecnócratas, los cuales, por otro lado, difieren unos de otros. Por fidelidad al espíritu de los acuerdos de paz, hay que someter esos análisis y sus recomendaciones a la discusión pública, en aras de una mayor

Las tendencias inevitables hacia el autoritarismo, la exclusión y la imposición del partido gobernante pueden ser contrarrestadas democráticamente por una oposición lúcida y fuerte.

equidad y democracia.

La viabilidad de El Salvador como nación depende en gran medida del modelo económico social que se implemente. El actual ya ha demostrado sus límites para promover el desarrollo económico y erradicar la pobreza. El primero se reduce al crecimiento de los índices macroeconómicos y a la concentración de la riqueza en los círculos transnacionalizados, mientras tanto, la pobreza se extiende cada vez más. Por lo tanto, profundizar aún más esta política económica neoliberal, en los términos propuestos por el gobierno actual, solamente servirá para consolidar los resultados ya conseguidos. Esto quiere decir que no habrá desarrollo nacional, ni económico ni social.

Si en el centro de la política gubernamental se encuentra la persona, la prioridad de aquélla debiera ser el bienestar de cada uno de los salvadoreños y salvadoreñas. De ahí que, aparte de otras consideraciones, sea contradictorio colocar en el mismo nivel la globalización y la erradicación de la pobreza, dos metas, por lo general, incompatibles. Un buen planteamiento económico social debe partir de las realidades existentes e incluir los detalles de su implementación así como sus costos y plazos y debe evitar a toda costa considerar las medidas aisladamente, porque, entonces, con facilidad se cae en la superficialidad y en la contradicción.

Una muestra de esta superficialidad se encuentra en el pacto de San Andrés, cuyas partes evidencian su incapacidad al tratar con inusitada ligereza temas fundamentales para la vida nacional. A la escasez y mala calidad del agua potable sólo dedican unas pocas líneas; el deterioro alarmante del medio ambiente lo piensan solventar con multas y reforestación, pero incluso esto está condicionado a la existencia de fondos —lo cual no se señala en los otros programas, dando la impresión de que sí existe financiamiento para ellos—; de la energía y de los asentamientos urbanos marginales así como de la administración de justicia, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y del ministerio público no se dice nada o se afirman generalidades sin ningún compromiso. Ni siquiera la privatización, un tema tan vital para la política económica neoliberal, se escapa de esta ligereza, pues no obstante plantear el tema en términos de transparencia, no especifican qué empresas deben ser privatizadas ni por qué deberían serlo.

(c) Consolidar la oposición. El triunfo de ARENA en las elecciones pasadas no significa que dispone del país y de sus recursos a su antojo. Ciertamente, recibió un mandato, pero no un cheque en blanco. El partido gobernante tiene que cumplir ante todo con sus obligaciones constitucionales, por lo tanto, entre otras cosas, debe promover la democracia, erradicar la pobreza, garantizar la seguridad pública, combatir la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado y establecer una estructura tributaria equitativa. La democracia se promueve cumpliendo religiosamente con todas las disposiciones constitucionales orientadas al buen gobierno y atendiendo a las aspiraciones legítimas del electorado y no sólo a los intereses de minorías.

Las tendencias inevitables hacia el autoritarismo, la exclusión y la imposición del partido gobernante pueden ser contrarrestadas democráticamente por una oposición lúcida y fuerte. De hecho, la oposición política ya ha demostrado el poder que tiene su unidad al forzar a ARENA y al Partido Demócrata a violentar los procedimientos legislativos establecidos —exclusión arbitraria de un diputado de la comisión de hacienda para evitar un dictamen negativo sobre el incremento del impuesto al valor agregado e introducción de la propuesta en el pleno legislativo como pieza de correspondencia con dispensa de trámites de forma poco transparente— para conseguir la aprobación del incremento del impuesto al valor agregado. De otra manera, esa medida no se hubiese convertido en ley. Si esta unidad se mantiene y se consolida, la oposición política podría llegar a tener poder como para forzar al gobierno y al partido oficial a practicar la democracia. Si éste fuese el caso, las ventajas que la mayoría legislativa actual le proporciona a ARENA se reducirían considerablemente.

Este dinamismo tan novedoso de la oposición política proviene de la desprotección en la cual el Estado ha dejado a algunos sectores económicos tradicionales como resultado de las transformaciones impulsadas por el gobierno anterior. El cambio más importante fue la modificación de las reglas financieras. Al desprenderse de la banca, el Estado también se desentendió de ciertos grupos que dependían de ambos. En la actualidad, estos grupos ya no dependen del Estado, sino de los propietarios de los bancos y, por consiguiente, del crédito. Pero estos últimos no tienen para con ellos las mismas consideraciones ni les hacen las mismas concesiones que anteriormente recibían del Estado. Otra amenaza que se cierne sobre estos sectores es el arancel cero hacia el que se encamina El Salvador, lo cual los dejará a merced de las empresas transnacionales.

Algunos de estos grupos desprotegidos están representados por los partidos Demócrata Cristiano y de Conciliación Nacional. Por eso, los

llamados “cañonazos” —es decir, el soborno tradicional— de ARENA en la asamblea legislativa no funcionaron en el caso del incremento del impuesto al valor agregado. Ante el avance del modelo neoliberal, que beneficia más directamente al sector transnacional, los partidos políticos tradicionales se han mostrado menos vulnerables al soborno y, en cambio, se han identificado más con los intereses económicos de los sectores que representan.



La postura de la oposición política se ha visto reforzada por las vacilaciones de las grandes gremiales de la empresa privada. La víspera de la firma del pacto de San Andrés, las gremiales reunieron en sus instalaciones a la oposición política —incluidos sus adversarios tradicionales, la democracia cristiana y el FMLN— para presentar una alternativa. Pero al día siguiente, se presentaron en pleno en San Andrés y se pronunciaron a favor del pacto. Posteriormente, quizás pensando mejor las cosas, tomaron distancia. No obstante haber sido consultadas por el gobierno, las recomendaciones de estas gremiales no han sido tomadas en cuenta, con lo cual la mayoría de sus miembros quedaría excluida de los beneficios de la política económica neoliberal.

La mayor parte de la empresa privada, que todavía necesita de la protección estatal para reconvertirse o simplemente para seguir existiendo, estaría a punto de quedar abandonada a su propia suerte. Las grandes gremiales de la empresa privada no se oponen al planteamiento neoliberal del gobierno, pero cuestionan sus ritmos y plazos. Quisieran más lentitud en los primeros y la prolongación de los segundos, pero los sectores vinculados al capital transnacional reclaman precisamente lo contrario. De no resolverse esta contradicción entre la empresa privada y el gobierno, la oposición podría obtener ventajas políticas importantes.

Ahora bien, no hay que hacerse demasiadas ilusiones. Es poco probable que la oposición política mantenga su postura, sobre todo una vez aprobado el incremento del impuesto al valor agregado. Por lo que toca a las gremiales de la empresa privada, no sería extraño que éstas llegaran a un entendimiento con el gobierno por medio del cual éste diese una nueva oportunidad a quienes aún desean participar en la reconversión y a quienes no quieran o no puedan hacerlo, les ayudaría a sobrevivir hasta que desaparecieran o perdieran peso político. En cualquier caso, por ahora, el gobierno no parece caer en la cuenta de las consecuencias que podrían derivarse del atropello del cual está siendo objeto la empresa privada rezagada y desprotegida.

En este contexto, el FMLN cuenta con algunas posibilidades si logra articular una propuesta alternativa, si supera el aislamiento y si capitaliza a favor de la primera el descontento del sector privado y popular. Tiene a su favor que la gestión de la política neoliberal, tal como está planteada, agudizará y extenderá las contradicciones y el malestar. Quienes impulsan esa política se muestran muy seguros de sí mismos porque saben que, en la actualidad, no existe alternativa. Por consiguiente, con creatividad y esfuerzo, el FMLN podría convertirse en esa alternativa.

(d) Establecer con claridad el papel de las fuerzas sociales. Las fuerzas sociales debieran analizar con suma cautela la alternativa neoliberal y ser extremadamente cuidadosas para no dejarse engañar por sus cantos de sirena. Ciertamente, algunas de sus organizaciones pueden verse favorecidas por las dádivas gubernamentales, pero éstas no evitarán el encarecimiento de la vida ni la escasez y deficiencia de los servicios públicos ni la reducción de las oportunidades. A ello se debe agregar que las organizaciones sindicales y populares no son escuchadas ni mucho menos consultadas. El malestar generado por todo esto ha estimulado las primeras protestas callejeras frente a las cuales el gobierno tiende a responder cada vez más con los antimotines.

La democratización exige establecer canales o instancias para que las fuerzas sociales puedan expresar su opinión libremente. Recurrir a los antimotines para acallar la protesta popular, que no tiene otro espacio que la calle, es jugar con fuego. En este sentido, ha sido un acierto político, aparte de ser un derecho constitucional, el que la Corte Suprema de Justicia haya declarado inconstitucional la ordenanza de la municipalidad de San Salvador que pretendía restringir considerablemente dicho espacio.

Además de protestar, las fuerzas sociales deben presionar para exigir la discusión de los principios básicos de la política neoliberal y ensayar propuestas alternativas simultáneamente. En esta misma línea de acción,

deben reclamar, con la constancia que sólo ellas poseen, el derecho constitucional que las asiste para pedir cuentas a los funcionarios públicos por sus acciones y omisiones. Aunque a primera vista parezca banal, éste podría ser un aporte valiosísimo para la democratización del país y un freno para las aventuras de los tecnócratas.

(e) Exigir al Estado cumplir con sus responsabilidades. La política económico social del Estado debiera tener como prioridad la satisfacción de las necesidades básicas de toda la población y en particular de las mayorías empobrecidas, tal como lo establece claramente la Constitución. Para ello no se necesitan pactos ni acuerdos, sino responsabilidad constitucional por parte del gobierno y exigencia de lo que es un derecho fundamental por parte de la sociedad. A estas alturas, ya debiera estar claro que El Salvador sólo es viable y, por lo tanto, alcanzará la estabilidad si las necesidades básicas de todos son satisfechas. Ello requiere de grandes sacrificios por parte de quienes tienen más, de una enorme creatividad para encontrar las verdaderas soluciones por parte de quienes se identifican más con las mayorías empobrecidas y de una solidaridad dispuesta a poner el interés común por encima de cualquier otro, ya sea de partido, clase o sector.

** * **

En El Salvador todavía hay demasiada imposición, corrupción e ilegalidad. Mientras no se avance en la erradicación de estos males políticos, la viabilidad y la estabilidad del país no serán posibles. A la base de todo ello debiera estar la erradicación de la pobreza y de sus causas. Si lo que se busca es el bien común a partir de la satisfacción de las necesidades básicas de todos, no debe temerse la discusión abierta ni la participación de todas las fuerzas sociales en el quehacer de la cosa pública.

No es imponiendo desde el poder como se democratiza una sociedad, sino promoviendo y admitiendo la participación de todos, porque se está convencido del valor de sus aportes y, por lo tanto, porque se tiene un interés genuino por escuchar y aprender para decidir y actuar únicamente para beneficio del interés común. Estas condiciones para una democratización económica y política debieran fundamentar cualquier "plan de nación", es decir, nunca debieran ser negadas si se quiere que la paz sea firme y duradera. La sociedad salvadoreña en su conjunto todavía no ha podido decidir sobre su propio destino, sino que, de nuevo, otros, una minoría muy exclusiva, han decidido por ella, arrebatándole el derecho a la autodeterminación.

San Salvador, 27 de junio de 1995.